

Sobre la desvinculación académica al interior de las instituciones de educación superior en Colombia.

Línea Temática: Políticas nacionales y gestión institucional para la promoción de la permanencia y reducción del abandono.

Wimar Moreno

Instituto Tecnológico Metropolitano ITM

wimar33@yahoo.com.ar

Sara López Mejía

Universidad Autónoma Latinoamericana

Sara.lopez8088@unaula.edu.co

Resumen.

El presente artículo de investigación pretende ubicar algunas reflexiones, en torno a las relaciones que pueden existir entre el fenómeno de la desvinculación académica al interior de la educación superior, y, las políticas educativas coordinadas por los gobiernos de turno en Colombia desde 1961 con la presidencia de Alberto Lleras Camargo hasta el 2021 con Iván Duque Márquez. Comprender el fenómeno de la desvinculación académica implica detenerse tanto en la dimensión subjetiva de los estudiantes, como en las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales, que determinan el acceso diferenciado de todos los sectores poblacionales a la educación como un derecho fundamental, y en este sentido, reconocer los efectos de la voluntad política (materializada en políticas educativas) como una causa estructural de la desvinculación académica universitaria en el país, en tanto una dimensión poco explorada en el campo de los estudios sobre “deserción estudiantil universitaria”

Descriptorios o Palabras Clave: Políticas Educativas, Planes de Desarrollo, Desvinculación Académica Universitaria.

1. Introducción.

Desde la década de 1980 se han publicado innumerables estudios sobre el fenómeno de la deserción estudiantil, sus causas y efectos en los distintos niveles educativos (básica primaria, secundaria, técnica, tecnológica y universitaria), entre estos Tinto (1989), Kember (1989), McCall (1999), Espíndola y León (2002), Ministerio de Educación Nacional (2005), sin embargo, es posible observar en la revisión de algunos de ellos, un uso aleatorio de los términos de deserción estudiantil y abandono estudiantil, al momento de abordar la cuestión de la desvinculación académica por parte de los estudiantes, en las instituciones de educación públicas y privadas en los distintos niveles de formación. En este sentido, el objetivo de este artículo de investigación consiste en analizar las relaciones que se establecen entre las políticas nacionales y el fenómeno de la desvinculación académica al interior de las Instituciones de Educación Superior en Colombia.

Para intereses de este artículo, se propone entender este fenómeno como una desvinculación académica por parte de los estudiantes al interior de las instituciones de educación superior (IES) en Colombia. Proponiendo un lugar distinto para la comprensión de este objeto de estudio, en un intento por desmilitarizar el lenguaje académico, en tanto el uso predominante del término “deserción”, está vinculado con las escuelas militares y el abandono por parte de un soldado de sus obligaciones castrenses. En este sentido, se propone el uso de la categoría desvinculación académica con el fin de poder situar desde una perspectiva diferente, los fenómenos sociales asociados y vinculados con la educación.

Es importante aclarar que las formas como se ha nombrado esta cuestión del retiro de estudiantes del sistema educativo, ha sido bajo el concepto de deserción, en esa medida, la bibliografía referida da cuenta de esta categoría de análisis que buscamos interpelar desde el pensamiento complejo y las teorías críticas latinoamericanas de la educación, el desarrollo y la planificación estatal, para crear la posibilidad de comprender el fenómeno desde un lugar de enunciación distinto, donde la responsabilidad no recaer de manera exclusiva sobre el sujeto estudiante y sus herramientas para sostener su proceso educativo, y volcar la mirada, hacia las responsabilidades estatales e institucionales, con la culminación satisfactoria de los procesos de formación de los estudiantes al interior de las instituciones de educación superior.

3. Resultados

¿Impacta la voluntad política la desvinculación académica por parte de estudiantes dentro de las IES?

El proceso de planeación de la educación en Colombia, tiene su génesis en los proyectos de intervención extranjera principalmente liderados por Estados Unidos y su “Alianza para el progreso”, el Banco Mundial, el FMI y el encuentro denominado “Punta del Este” realizado en Uruguay, donde la banca privada y los gobiernos norteamericanos, junto a los gobiernos latinoamericanos que luchaban contra las ideas del comunismo, reglamentan la estructuración institucional y fiscal de varios Estados, entre esos el colombiano y sus instituciones, con el fin de “garantizar” el buen manejo de los recursos y el pago efectivo de la creciente deuda externa por parte de los gobernantes colombianos.

Así, las reformas presentadas en Colombia como en el resto de la región latinoamericana, en la última década, se han caracterizado por las preocupaciones de reajuste estructural en aras de que los países del continente puedan cumplir con sus compromisos frente a la deuda externa, lo que ha conducido, a pesar de las particularidades locales, a la implementación de un modelo general basado en la eficiencia económica y la lógica del mercado, en cuanto a la reorganización del sistema educativo y la redefinición de los roles que deben desempeñar los distintos actores sociales involucrados en este campo (Herrera & Acevedo, 2020, p. 82)

Esta intervención extranjera con el paso de los años, sumado a las misiones de asesores y evaluadores extranjeros como: Kemmery, Currie, CEPAL y Le Bret, logra introducir en el corazón de la política que se hace en Colombia, las nociones de desarrollo y crecimiento económico creadas en Estados Unidos y su aparente solidez económica y política, luego de ganar la segunda guerra mundial; también es posible afirmar que el proyecto expansionista del capitalismo y sus disposiciones se hace posible a través de las intervenciones económicas y políticas que organizan a los países “subdesarrollados” para instaurar el capitalismo, a través de legislaciones y pactos entre gobiernos de turno.

Así, a finales de la década del 70, durante los 80's y hasta inicios de los 90, que comprende los periodos presidenciales de Julio Cesar Turbay (1978-1982), Belisario Betancur (1982-1986), Virgilio Barco (1986-1990) y César Gaviria (1990-1994) el sistema educativo sufrió grandes impactos en términos de su vocación y planeación, pues la llegada del neoliberalismo como

proyecto político de los países “desarrollados” para los países “subdesarrollados”, confirió al libre mercado la privatización de la educación y la posibilidad de orientarla hacia una vocación productiva, competitiva y acelerada, cuya materialización se pondrá en marcha en los gobiernos posteriores Ernesto Samper (1994-1998), Andrés Pastrana (1998-2002), Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), Juan Manuel Santos (2010-2018) e Iván Duque (2018-2022).

Este es el inicio del aumento de instituciones de educación superior privadas, la ampliación en cobertura e infraestructuras, el aumento de programas de formación para el trabajo, la educación rural y el sostenimiento del proceso de industrialización.

La política educativa durante la década del noventa se circunscribe al nuevo orden mundial. De tal suerte que una serie de compromisos, “una nueva alianza, un nuevo bloque de poder que se ha formado tiene una influencia creciente en la educación y en todas las cosas sociales. Este bloque de poder combina fracciones múltiples del capital que está comprometido con las soluciones neoliberales del mercado para los problemas educativos” (Herrera & Acevedo, 2020, p. 81)

Es importante resaltar que en los planes de desarrollo escritos entre 1961 y 2018 tienen como elementos comunes: la necesidad de una reforma agraria, la redistribución de los recursos y beneficios del “libre mercado”, el acceso universal a los derechos humanos para los sectores empobrecidos, la dotación de viviendas para la población vulnerable y la necesidad de resolver los “problemas de convivencia”.

Esta última dimensión de la esfera pública colombiana, se reconoce hoy, no como una dificultad en la convivencia sino como un conflicto político y armado, que ha afectado directamente el acceso de niñas, niños, jóvenes y adultos a la educación pública en todos sus niveles, a través de múltiples acciones cómo: uso de escuelas como cuarteles, centros de tortura y de violencia sexual; violencia armada en los territorios que ocasiona desplazamientos forzados en forma masiva; instalación de “fronteras invisibles” y minas antipersonas en el caso rural, que impide el desplazamiento de las niñas, niños, jóvenes y adultos a los centros educativos, entre otros escenarios; asesinato y amenazas sistemáticas a docentes (Romero, 2011). A pesar de que estos planes han intentado responder, tanto a los requerimientos extranjeros para la financiación como a las demandas sociales, dan cuenta de los problemas que estructuralmente vive Colombia desde la fundación del Estado Nación.

Estos elementos comparten una raíz política y social: la desigualdad social, la violencia y el uso del poder para el beneficio de quien lo ejerce dentro y fuera de las instituciones públicas, en razón de mantener con el recurso público los intereses particulares. Frente a este panorama político de Colombia respecto al sistema educativo ¿cómo podría la educación escapar de una política monetaria internacional que condiciona los gobiernos nacionales y ubica las políticas gubernamentales al servicio de la acumulación capitalista a nivel global?

Esta es una pregunta que este artículo no podrá responder, en tanto la complejidad que contiene, no puede incidir en la voluntad política de los gobernantes colombianos. En este orden de ideas, la voluntad política ha sido un elemento central para comprender por qué a pesar de los esfuerzos económicos, sociales y culturales, el acceso a la educación de calidad sigue siendo un privilegio de clase, raza y sexo y en este sentido, la desvinculación académica sigue apareciendo como una constante entre los desafíos que enfrenta la educación en el país.

Las decisiones políticas que se han tomado desde los entes gubernamentales, no han tenido en 60 años un efecto real de lucha contra la desigualdad social, por el contrario, aún en el 2020, “1 de cada 2 estudiantes se retira durante su carrera” (Universidad de Santander, 2020, p.1), mientras tanto, los créditos educativos inflan las arcas de la banca privada, se aumenta de forma acelerada la oferta de modalidades técnicas y tecnológicas para responder al mercado y sus demandas actuales, se invierte en la ampliación en infraestructura y planta docente, en medio de un conflicto político y

armado que afecta directamente el acceso a las IES, por parte los hombres y mujeres jóvenes pertenecientes a los sectores populares, que deben sortear todos los efectos de la política macroeconómica en sus psiquis, hogares y vida colectiva, ante lo cual no todas y todos tienen las herramientas emocionales, familiares, económicas e institucionales para combatir una política diseñada para que sus vidas sean cada vez más precarias.

Si el aprendizaje es el resultado de un proceso donde participa el aprendiz, además de las condiciones escolares es preciso contar con determinadas condiciones sociales que la escuela no está en condiciones de garantizar. Si se quiere construir una sociedad más igualitaria y más justa no basta contar con una política educativa adecuada, sino que es preciso articular políticas económicas y sociales que garanticen la provisión destinada a garantizar mínimos de bienestar, la satisfacción de necesidades básicas que constituyen el cimiento de la ciudadanía y la realización práctica de los derechos sociales instituidos en todas las constituciones republicanas de los Estados latinoamericanos (Tenti, 2008, p.71)

Por esto, afirmar que la desvinculación académica por parte de los estudiantes al interior de las IES, es un efecto de las políticas de mercantilización de la vida, es ubicar históricamente unas responsabilidades institucionales y políticas en el sostenimiento de la desigualdad social, en tanto los planes, programas y proyectos que se han diseñado, aun cuando su intención haya sido reducir la brecha social, no han sido pensados para que los sectores populares realmente puedan acceder a una vida digna y a una educación de calidad. Al respecto el informe Aprender para hacer realidad la educación, publicado en el 2018 por el Banco Mundial, asegura que:

(...) lo que es aún más preocupante, muchos países no brindan aprendizaje para todos. Las personas que ya se encuentran en desventaja en la sociedad (debido a su pobreza, su ubicación geográfica, su etnia, género o discapacidad) son los que menos aprenden. De este modo, los sistemas educativos pueden ampliar las brechas sociales en lugar de reducirlas. Los factores que generan las deficiencias en el aprendizaje han comenzado a identificarse con mayor claridad gracias a nuevos análisis que destacan tanto la causa inmediata (servicios inadecuados que amplifican los efectos de la pobreza), como los problemas sistémicos más profundos (técnicos y políticos) que perpetúan la escolarización de baja calidad. (Banco Mundial, 2018, p.4)

Para el caso colombiano, es posible evidenciar estas formas de la exclusión del sistema educativo, a partir de las condiciones materiales de existencia en las que viven más de la mitad de la población estudiantil universitaria, la calidad de la educación básica secundaria pública, las garantías laborales de maestras y maestros, sin hablar de los nefastos efectos de la guerra tanto en el sector rural como urbano, y su relación con la poca infraestructura para la educación, la capacitación docente y sus altos niveles de empobrecimiento, hambre y desvinculación académica en todos los niveles.

4. Conclusiones

La educación en Colombia ha sido un campo de disputa de los proyectos políticos que han protagonizado los escenarios democráticos y representativos del país, sostenidos en razón de los intereses del bloque de poder global que representan, muestra de ello son las políticas educativas que se han desarrollado a lo largo del tiempo y que han puesto al centro de los procesos de aprendizaje, la producción de saberes técnicos y científicos para el fortalecimiento de los mercados globales y las economías locales.

En tanto el proceso de planificación social en Colombia, ha estado fuertemente influenciado por los requerimientos y asesorías externas, basadas en experiencias de países industrializados, que además gozan de los beneficios del neoliberalismo, es claro que poco a poco se reestructuró el sistema fiscal colombiano, inicialmente desde una postura proteccionista de la economía local que dio apertura al capital y la inversión extranjera, con el fin de fortalecer la industria y con esta los demás sectores de la sociedad. El impacto de estos requerimientos de países y organizaciones financieras extranjeras es tan profundo, que en el presente las instituciones públicas no pueden sostener con los pocos recursos que les llegan, todo un sistema educativo que desde la voluntad política no se apuesta por fortalecer.

Al interior de la educación esta proyección económica de la sociedad, ha convertido las instituciones de educación superior en espacios de exclusión y en ocasiones de expulsión, de hombres y mujeres, principalmente jóvenes que viven en condiciones precarizadas de empobrecimiento, violencia y desigualdad social. Así, los requerimientos tanto de acceso como sostenimiento al interior de las IES, se presentan en muchas ocasiones como inaccesibles para los sectores populares, en parte debido al acelerado proceso de acumulación neoliberal que reduce permanentemente las posibilidades socio-económicas que permitirían vivir una vida digna y gozar de todos los derechos civiles, donde además, no se crean espacios para pensar los procesos de aprendizajes múltiples, no hegemónicos, que estén atravesados por la comprensión de la diferencia como principio de la identidad cultural, sexual, las condiciones psicomotrices de los estudiantes, las relaciones intrafamiliares, las disposiciones psíquicas y emocionales.

Es posible entonces afirmar que una de las causas de la desvinculación académica por parte de los estudiantes al interior de las IES, son los efectos de las políticas públicas que priorizan la inversión del recurso público para el fortalecimiento de la industria y las fuerzas militares para contener el conflicto armado que vivimos hace más de 60 años, en un país que necesita de manera urgente, direccionar los recursos a la inversión social para garantizar a toda la población el acceso a los derechos humanos, en tanto prevalece la precarización de la vida de los sectores vulnerables y mayoritariamente afectados por la guerra y los procesos inequitativos de distribución de la riqueza y el acceso al poder. Es en este escenario que las y los estudiantes, deben reinventar las posibilidades que tienen para sostenerse dentro de un sistema que no está diseñado, ni pensado para acogerle y acompañar el ritmo de su propio proceso, sino por el contrario, antagoniza con sus particularidades desde adentro, casi hasta el punto de hacer inviable el sostenimiento del ritmo académico y así mismo de la culminación de su proceso de formación.

Referencias

Banco Mundial. (2018). Aprender para hacer realidad la promesa de la educación. Washington: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial.

Herrera, M., & Acevedo, R. (2020). Las políticas públicas y su impacto en el sistema educativo colombiano. Una mirada desde los planes de desarrollo 1970-2002. *Nómadas*, 76-84.

Romero, F. A. (2011). Impacto del conflicto armado en la escuela colombiana, caso departamento de Antioquia, 1985 a 2005. Bogotá. Obtenido de <https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/6395/RomeroFlorAlba2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Tenti, E. (2008). Dimensiones de la exclusión educativa y políticas de exclusión. *Revista Colombiana de Educación*, 60-73.

Universidad de Santander. (25 de marzo de 2020). Universidad de Santander. Obtenido de UDES: https://udes.edu.co/images/micrositios/calidad/boletines/boletin_estadistico-9-2020.pdf